

I

La operación estadística sobre la que se fundamenta esta consulta trae causa del programa anual 2024 del Plan Estadístico Nacional 2021-2024, aprobado por Real Decreto 51/2024, de 16 de enero, en cuyo anexo II se incluye la operación estadística 8429, sobre la cual proporcionan información adicional y complementaria los anexos III y V. Asimismo, para llevar a cabo dicha operación estadística el INE ha solicitado una serie de datos tanto a la Tesorería General de la Seguridad Social como al Instituto Nacional de la Seguridad Social, dentro de los cuales se plantea consulta a propósito de la petición del dato de la variable tipo de prestación cuya solicitud el INE ha justificado en los siguientes términos: “ *En el desarrollo de la ERADA, hemos identificado una serie de desafíos significativos al intentar determinar el estado de actividad de las personas usando exclusivamente datos administrativos. Un desafío particularmente complejo es distinguir entre desempleo e inactividad. Este matiz es crucial, ya que la propensión a trabajar varía considerablemente entre los receptores de diferentes tipos de pensiones y prestaciones. La inclusión de la variable tipo de prestación en nuestra petición mensual de datos es fundamental para aplicar técnicas avanzadas de análisis, incluyendo el aprendizaje automático (‘machine learning’) y la aplicación de modelos estadísticos, que asignan probabilidades al estado de actividad o inactividad de cada individuo*”.

A la vista de esta petición y teniendo en cuenta la redacción del artículo 25.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD) se formula consulta a la AEPD en relación con la posibilidad de que la Administración de la Seguridad Social pueda comunicar al INE para la realización de la operación estadística ut supra descrita datos personales incluidos en los artículos 9 y 10 del RGPD.

II

Sentados los términos de la consulta objeto de este informe cabe comenzar, tal y como acertadamente señala el Delegado de Protección de Datos en la formulación de la misma, con el análisis del régimen jurídico del tratamiento de datos personales a efectos estadísticos. A tal fin, cabe partir de dos conclusiones señaladas con claridad en nuestro informe 310988/2017, la primera de ellas relativa a la consideración del grado de discapacidad como un incuestionable dato de salud así como a la inexistencia de una prohibición absoluta de la utilización de datos personales de salud con fines estadísticos, y la segunda relativa a la necesidad de contar con una base jurídica propia y habilitante para el tratamiento de datos personales, que en ningún caso será la posibilidad de realizar una función estadística; todo ello unido a la necesidad de que, además, en el caso de datos personales sensibles exista también alguna de las causas previstas en el artículo 9.2 RGPD que levante la prohibición de tratamiento prevista en el artículo 9.1 RGPD. Por su interés para la resolución de esta consulta traemos a colación un extracto del referido informe: “(...)

I

El “grado de discapacidad declarado en el contrato” es un dato de carácter personal relacionado con la salud, tal y como lo define el art. 5.1 g) del Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD), de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal (LOPD): g) Datos de carácter personal relacionados con la salud: las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo. En particular, se consideran datos relacionados con la salud de las personas los referidos a su porcentaje de discapacidad y a su información genética.

Lo mismo resulta de los Considerandos 35 y 54 del RGPD

Como puede observarse de los Considerandos 52 y 53, y más en concreto en el art. 9, todos ellos del RGPD, se establece un principio general de prohibición de tratamiento los datos personales de salud (9.1. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona física). Y sin embargo, el art. 9.2 del RGPD establece que dicha prohibición general no será de aplicación cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes, que, entre otras, son: (i) a) si media el

*consentimiento explícito del interesado (excepto cuando el Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada en el apartado 1 no puede ser levantada por el interesado); (ii) g) cuando el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado; o (iii) j), cuando el tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o **fines estadísticos**, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado.*

Por tanto, se observa que los datos de salud pueden ser objeto de tratamiento estadístico, según el RGPD, cuando así lo establezca el Derecho de la Unión o de los Estados miembros, y aun en ese caso, siempre que se den las garantías apropiadas a fin de proteger datos personales y otros derechos fundamentales (Considerando 52 RGPD).

Podemos concluir por tanto, en primer lugar, que del RGPD no se desprende una prohibición absoluta de la utilización de datos personales de salud con fines estadísticos, sino que remite al derecho nacional de los Estados miembros, o al derecho de la Unión, (que en el caso concreto que estamos analizando, de utilización para fines estadísticos, será al derecho del Estado miembro o de la Unión que regule la estadística correspondiente) al que habrá de acudirse para determinar si el mismo prohíbe el tratamiento para dichos fines estadísticos de los datos de salud, o si admite su tratamiento o cesión, así como para el estudio de las “garantías apropiadas” que, en caso de admitirlo, requiere el RGPD.

El art. 6.4 c) del RGPD tampoco parece excluir la utilización de las “categorías especiales de datos personales” (entre ellos datos de salud, art. 9 RGPD) de una posible utilización para fines distintos para los que se recogieron, entre ellos los declarados por el RGPD como expresamente compatibles, como los fines estadísticos (art. 5.1 b) RGPD). Ahora bien, establece dicho art. 6.4 RGPD prevenciones para dicha utilización que serán de aplicación siempre y cuando dicha utilización de los datos personales para

finés distintos de aquel para los que se recogieron no esté basada (i) en el consentimiento del interesado o (ii) en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que constituya una medida necesaria y proporcional en una sociedad democrática para salvaguardar los objetivos indicados en el artículo 23, apartado 1 [del RGPD] –que no sería aplicable al presente caso-. Entre dichas prevenciones a tener en cuenta por el responsable del tratamiento con el objeto de determinar si un fin es compatible con aquel para el que se recogieron los datos es precisamente que se trate de datos especialmente protegidos.

II

Ahora bien, no parece posible, a la vista del RGPD y de la LOPD, considerar la existencia de una posible “función estadística” como una base jurídica autónoma para el tratamiento de los datos personales, -y menos por tanto para los datos sensibles-, que permita el tratamiento de los datos con independencia de la existencia de una base jurídica para el tratamiento de las previstas en el RGPD (y en este momento en la LOPD); es decir, el tratamiento de los datos sensibles con fines estadísticos, aun siendo compatible con el fin inicial para los que se recogieron dichos datos, no es en sí mismo [dicha finalidad estadística] una base jurídica suficiente para el tratamiento, sino sólo un “fin compatible”, de modo que incluso para la utilización de los datos personales para fines estadísticos habrá de existir una base jurídica que legitime el tratamiento de dichos datos, ya sea el consentimiento del afectado, o cualquier otro previsto en el art. 6.2 LOPD, o en el caso del RGPD, cualquiera de las bases jurídicas previstas en el art. 6 RGPD; además, para los datos sensibles, habrá de existir una causa de las previstas en el art. 9.2 RGPD que levante la prohibición de tratamiento prevista en el art. 9.1 RGPD.

Que ello es así, nos lo recuerda el Dictamen del Consejo de Estado de 26 de octubre de 2017, realizado sobre el Anteproyecto de LOPD para adaptar la normativa española al RGPD. A este respecto dice así el Dictamen al comentar sobre el art. 21 del Anteproyecto de LOPD:

[...] hay que tener en cuenta que el considerando 51 del reglamento [RGPD] que establece expresamente, en relación con el tratamiento de estos datos sensibles, que “además de los requisitos específicos de ese tratamiento, deben aplicarse los principios generales y otras normas del presente reglamento, sobre todo en lo que se refiere a las condiciones de licitud del

tratamiento.” De lo anterior podría deducirse - aunque en este punto la interpretación del Reglamento tampoco es clara – que, sin perjuicio de la concurrencia de uno de los supuestos de excepción a la prohibición general de tratamiento del art. 9.2, el tratamiento habrá de ser lícito al amparo de una de las circunstancias del art. 6.1, lo que en ocasiones podrá dar lugar a exigencias redundantes, pero en casos como el contemplado en la letra e) [del RGPD] podría interpretarse que el tratamiento de los datos sensibles hechos manifiestamente públicos por el interesado sólo será lícito si responde, por ejemplo, a una obligación legal, o si el afectado ha dado su consentimiento expreso. En otro caso, habría que entender que el reglamento presenta una grave incoherencia interna, excepcionando precisamente para el tratamiento de datos sensibles la exigencia general de que el consentimiento del afectado, cuando sea base del tratamiento, sea expreso.

El art. 7.3 LOPD tan sólo contempla como base jurídica para el tratamiento o cesión de los datos de salud el que “por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente”. Por ello, hay que entender que el tratamiento de los datos sensibles de salud, incluso para fines estadísticos, necesita, bien del consentimiento expreso del afectado bien de la existencia de una ley que así lo disponga por razón de interés general”.

Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en este informe, centrándonos en particular en la necesidad de que concurra alguna causa de las previstas en el artículo 9.2 RGPD que levante la prohibición general del artículo 9.1 RGPD, la letra j) de dicho apartado segundo se refiere específicamente a la circunstancia de ser necesario el tratamiento para fines estadísticos siempre que se respeten las garantías previstas en el artículo 89 RGPD, estableciendo que:

“j) el tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado”.

Por su parte, el artículo 25.2 de la LOPGDD sobre tratamiento de datos en el ámbito de la función pública estadística dispone que (el subrayado es nuestro):

*“2. La comunicación de los datos a los órganos competentes en materia estadística solo **se entenderá amparada en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679 en los casos en que la estadística para la que se requiera la información venga exigida por una norma de Derecho de la Unión Europea o se encuentre incluida en los instrumentos de programación estadística legalmente previstos.***

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, serán de aportación estrictamente voluntaria y, en consecuencia, solo podrán recogerse previo consentimiento expreso de los afectados los datos a los que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679”.

Añadiendo el citado artículo 11 LFEP que:

“1. Cuando los servicios estadísticos soliciten datos, deberán proporcionar a los interesados información suficiente sobre la naturaleza, características y finalidad de la estadística, advirtiéndoseles, además, de si es o no obligatoria la colaboración, de la protección que les dispensa el secreto estadístico, y de las sanciones en que, en su caso, puedan incurrir por no colaborar o por facilitar datos falsos, inexactos, incompletos o fuera de plazo.

*2. En todo caso, **serán de aportación estrictamente voluntaria y, en consecuencia, sólo podrán recogerse previo consentimiento expreso de los interesados** los datos susceptibles de revelar el origen étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o ideológicas y, en general, cuantas circunstancias puedan afectar a la intimidad personal o familiar”.*

Con base en esta normativa, el peticionario de esta consulta solicita aclaración acerca de cuál de tres posibles interpretaciones resultaría más ajustada a derecho. Dichas interpretaciones, en síntesis, son las que siguen:

1. Necesidad del consentimiento del interesado tanto cuando la solicitud de dirige directamente a él, como cuando la solicitud se dirige a otros sujetos, como sería el caso de otras Administraciones Públicas. Ya que de lo contrario se podría eludir la eficacia y obligatoriedad de dicho consentimiento acudiendo directamente a otros sujetos.
2. Necesidad del consentimiento del interesado cuando se le requiere directamente el dato, pero no así en los supuestos del apartado primero, esto es, cuando la comunicación de los datos a los servicios estadísticos venga exigida en una norma de Derecho de la UE o se encuentre incluida en instrumentos de programación estadística legalmente previstos; siempre que dicha normativa contenga expresamente tanto la necesidad de recabar datos personales de los previstos en los artículos 9 y 10 RGPD como el carácter obligatorio de la estadística de que se trate.
3. Necesidad del consentimiento del interesado cuando se le requiere directamente el dato, pero no así en los supuestos del apartado primero, esto es, cuando la comunicación de los datos a los servicios estadísticos venga exigida en una norma de Derecho de la UE o se encuentre incluida en instrumentos de programación estadística legalmente previstos, sin ser precisa la justificación expresa de datos personales sensibles indicada en la interpretación anterior.

Sin perjuicio de analizar en el siguiente fundamento jurídico cual de estos tres escenarios se ajustaría mejor a las previsiones contenidas en nuestro Ordenamiento Jurídico, conviene ya anticipar la exclusión de este tercer escenario al disponer el artículo 7.3 LOPDGDD la necesidad para que puedan cederse datos de salud, incluso si se trata de fines estadísticos, de que se cuente bien con el consentimiento expreso del afectado, bien con la existencia de una ley que lo disponga expresamente por razón de interés general.

III

Entrando pues a la resolución de la cuestión controvertida en este informe, hemos de señalar que se trata de una clarificación jurídica que ya ha

sido abordada con anterioridad en múltiples informes emitidos por esta AEPD a cuyo examen necesariamente hemos de remitirnos por razones de coherencia, cohesión y consistencia.

En primer lugar, la cuestión relativa al alcance de la cesión de datos personales para fines estadísticos fue abordada en nuestro informe 310988/2017, el cual pese a ser emitido con anterioridad a la entrada en vigor del entonces recién aprobado RGPD ya abordada el análisis de la consulta que en el mismo se planteaba atendiendo a su regulación. En este sentido, el citado informe no solo confirma la necesidad de previsión legal disponiendo el carácter de una estadística como de respuesta o cumplimentación obligatoria para que sea posible considerar lícitamente realizada la cesión de datos personales, sino que también analiza la doctrina constitucional existente a propósito de esta cuestión, concluyendo la necesidad de una doble circunstancia consistente: i) no solo en la necesidad de que una norma con rango de ley haya previsto el carácter de cumplimentación obligatoria de la estadística de que se trate, ii) sino también en la necesidad de que dicha ley haya previsto con claridad la necesidad de disponer de dichos datos personales especialmente sensibles (datos de salud) para el concreto fin de la estadística que se pretenda realizar. Por su interés para la resolución de esta consulta traemos a colación un extracto del citado informe:

“(...) El TC, en su STC 292/2000 y, con mayor detalle, en la STC 17/2013, de 31 de enero, por la que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad 1024/2004, interpuesto por el Parlamento Vasco contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, en cuyo fundamento jurídico cuarto el Tribunal señaló:

*“En conclusión, tal como establece nuestra doctrina, es claro que **la LOPD no permite la comunicación indiscriminada de datos personales entre Administraciones Públicas** dado que, además, estos datos están, en principio, afectos a finalidades concretas y predeterminadas que son las que motivaron su recogida y tratamiento. Por tanto, la cesión de datos entre Administraciones Públicas sin consentimiento del afectado, cuando se cedan para el ejercicio de competencias distintas o que versen sobre materias distintas de aquellas que motivaron su recogida, únicamente será posible, fuera de los supuestos expresamente previstos por la propia LOPD, si existe*

*previsión legal expresa para ello [art. 11.2.a) en relación con el 6.1 LOPD] ya que, a tenor de lo dispuesto en el art. 53.1 CE, los límites al derecho a consentir la cesión de los datos a fines distintos para los que fueron recabados están sometidos a reserva de ley. **Reserva legal que, como es obvio, habrá de cumplir con los restantes requisitos derivados de nuestra doctrina- esencialmente, basarse en bienes de dimensión constitucional y respetar las exigencias del principio de proporcionalidad-** para poder considerar conforme con la Constitución la circunstancia de que la norma legal en cuestión no contemple, por tanto, la necesidad de contar con el consentimiento del afectado para autorizar la cesión de datos.*

Conforme a nuestra doctrina (STC 292/2000, FJ 16) corresponde al legislador determinar cuándo concurre ese bien o derecho que justifica la restricción del derecho a la protección de datos personales y en qué circunstancias puede limitarse. La finalidad de este derecho fundamental es garantizar a la persona un poder de disposición sobre el uso y destino de sus datos con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado, garantizando a los individuos un poder de disposición sobre esos datos, mientras que, para los poderes públicos, el derecho fundamental a la protección de los datos personales impone la prohibición de que se conviertan en fuentes de esa información sin las debidas garantías; y también el deber de prevenir los riesgos que puedan derivarse del acceso o divulgación indebidas de dicha información (STC 292/2000, FJ 6 in fine). En consecuencia debemos pronunciarnos acerca de si la limitación que, a juicio de la parte actora en el presente proceso constitucional, producen las disposiciones controvertidas está justificada y resulta necesaria y proporcionada puesto que las normas legales deben conciliar el bien jurídico protegido por el derecho fundamental que se reputa vulnerado, esto es, el derecho a la privacidad de las personas, expresado en el control sobre sus datos personales y la finalidad con la que los mismos se utilizan, con la garantía de otros bienes de relevancia constitucional”.

La consecuencia de todo lo que ha venido indicándose es que para que sea posible la utilización de los datos de carácter personal obrantes en un determinado fichero, sistema de información o base de datos por una Administración Pública será necesario que el acceso a los datos se funde en el ejercicio de una competencia de la misma que se encuentre prevista en una

*norma con rango de Ley y que la injerencia en el derecho fundamental a la protección de datos que implica dicho acceso supere el juicio de proporcionalidad establecido por el artículo 8.2 del CEDH y la doctrina del TC en el sentido declarado en la STC 207/1996, cuando indica que “para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres siguientes requisitos o condiciones: «si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (**juicio de idoneidad**); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (**juicio de necesidad**); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (**juicio de proporcionalidad en sentido estricto**)”.*

Si aplicamos todo lo anterior a la respuesta de la concreta consulta planteada, hay que responder concluyendo que la posibilidad del INE de solicitar “cualquier dato o archivo de utilidad estadística”, -según establece el art. 34.2 de la LFEP, y que el INE, según la consulta, utiliza para la solicitud al consultante-, está limitada por una doble circunstancia: (i) que la estadística para la que pretenda utilizarlo esté establecida en una norma con rango de ley (o europea) y sea de cumplimentación o respuesta obligatoria y (ii) que dicha ley establezca con claridad la necesidad de disponer de dichos datos personales especialmente sensibles (datos de salud) para el concreto fin de la estadística que se pretende realizar, de modo que habrá de ser el legislador, por razones de interés general (art. 7.3 LOPD) quien habrá determinado no sólo la existencia de la estadística, sino sus fines, y también la necesidad de contar con dichos datos personales especialmente protegidos para el cumplimiento de dicha razón de interés general.

*No puede por tanto interpretarse el art. 34.2 LFEP como una norma que permita en cualquier caso, sin tener en cuenta las circunstancias antedichas, -como un cheque en blanco- entender que faculta al INE para solicitar cualquier dato o archivo de datos, con independencia de la finalidad legalmente establecida de la estadística concreta y de los datos necesarios (adecuados, pertinentes y no excesivos) para cumplimentar la misma de acuerdo con dicha finalidad. En el caso de los datos de salud, los mismos habrán de ser necesarios, proporcionales al fin establecido, y **requeridos (necesarios)** por la norma que establece la estadística que se trata de cumplimentar, lo que habrá de ser fundamentado en la solicitud por el INE a los efectos de que por el*

responsable del tratamiento pueda evaluarse dicha circunstancia; sin que pueda admitirse una solicitud de información de datos personales sensibles que pretenda servir para “mejorar” la información suministrada por una determinada estadística, si dicha información no es estrictamente requerida por la norma habilitante.

En concreto, la consulta menciona que la información solicitada es respecto del grado y tipo de discapacidad declarado en el contrato por los trabajadores; y menciona que el INE lo solicita para el “cuestionario censal de 2021 (Operación estadística I0104)”. Pues bien, corresponderá al INE demostrar que dicha información solicitada es requerida (juicio de necesidad) por la norma legal habilitante (nacional o europea), y que es adecuada, pertinente y no excesiva (juicio de proporcionalidad) respecto de la finalidad concreta establecida para dicha estadística.

*Corresponderá al INE fundamentar (en el concreto caso presentado) en qué manera el conocimiento de la discapacidad es necesario o proporcional en sentido estricto a los efectos de los fines de dicha estadística, que justifiquen la solicitud de cesión de dichos datos. No hay que olvidar que la LFEP establece en su art. 11.2 que En todo caso, **serán de aportación estrictamente voluntaria** y, en consecuencia, sólo podrán recogerse previo consentimiento expreso **de los interesados** los datos susceptibles de revelar el origen étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o ideológicas y, en general, cuantas circunstancias puedan afectar a la intimidad personal o familiar.*

Por ello es necesaria una interpretación estricta respecto de los datos personales especialmente sensibles que se permite recoger de fuentes distintas del interesado, ya que si para estos es de aportación estrictamente voluntaria, la solicitud de datos sensibles de terceros a quienes no sean dichos interesados (art. 10.4 ó 34.2 LFEP) ha de ceñirse estrictamente a lo establecido por la ley (o norma europea), cuando ésta establezca la necesidad de dicha información, y en la manera en que lo establezca, siempre que sea apropiado, pertinente y no excesivo a los fines pretendidos por la estadística concreta que se pretende cumplimentar”.

Las conclusiones ut supra expuestas se han reiterado en numerosas ocasiones por la AEPD, por todas, informes 181577/2018 y 0007/2021, lo que determina el sentido que deba darse a la consulta ahora controvertida. Tal y como venimos examinando, se han suscitado dudas acerca de la cesión del dato de la variable de tipo de prestación, que como se ha explicado más arriba

constituye un dato de salud y, por tanto, especialmente protegido, y se ha mencionado que el INE lo solicita para cumplimentar la operación estadística 8429. Sentado lo cual, y con base en los pormenorizados razonamientos jurídicos expuestos, corresponde al INE demostrar que dicha información solicitada es requerida (**juicio de necesidad**) por la norma legal habilitante (nacional o europea), y que es adecuada, pertinente y no excesiva (**juicio de proporcionalidad**) respecto de la finalidad concreta establecida para dicha estadística.

Asimismo, corresponderá al INE fundamentar en este caso en concreto en qué manera la variable tipo de prestación que solicita es necesaria o proporcional en sentido estricto a los efectos de los fines de dicha estadística, hasta el punto de justificar la solicitud de dichos datos de salud, sin olvidar la previsión de aportación estrictamente voluntaria y previo consentimiento expreso de los interesados prevista en el artículo 11.2 LFPE.

En definitiva, esta AEPD confirma el criterio sostenido de manera consistente en nuestros anteriores informes, consistente en una interpretación estricta respecto de los datos personales sensibles que se permite recoger de fuentes distintas a los interesados, dado que si cuando se recaban los datos directamente de los interesados se requiere su consentimiento expreso, la solicitud de tales datos a terceros ha de ceñirse estrictamente a los establecido en la norma legal (europea o nacional) cuando ésta establezca la necesidad de dichos datos, y en la manera en que lo establezca, siempre que sea apropiado, pertinente y no excesivo a los fines pretendidos por la estadística concreta que se pretende cumplimentar.

Fuera de estos casos, esto es, existiendo algún tipo de duda razonable acerca del requerido juicio de necesidad y de proporcionalidad, con base en la interpretación estricta que afecta a la cesión de datos personales especialmente protegidos, procedería realizar la comunicación de tales datos de manera anonimizada, tal y como el consultante indica que lo ha venido haciendo con ocasión de anteriores peticiones.